

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de la Serena
CAUSA ROL : C-3089-2019
CARATULADO : EDDING FRAVEGA ANDREA RENEE CON
SOCIEDAD EDUCACIONAL Y CULTURAL TRINITY LTDA

La Serena, veintiuno de Enero de dos mil veintiuno

Vistos:

Con fecha 20 de agosto de 2019, comparece don Juan Pablo Guíñez Llambias, abogado, en representación de doña Andrea Renee Edding Fravega, psicóloga y doctora en ciencias de la educación, domiciliada para estos efectos en Avenida. Miramar N° 5324, Coquimbo, interponiendo demanda de cobro de honorarios en contra de Sociedad Educacional y Cultural Trinity Ltda., representada por don Luis Eduardo Ulloa Sandoval, profesor de educación física, ambos domiciliados en calle Juan Pablo II N° 1167, Villa La Florida, La Serena, en base a lo siguiente.

Refiere que con fecha 01 de marzo de 1998, doña Andrea Edding Fravega fue contratada por la Sociedad Educacional y Cultural Trinity Ltda., para realizar las labores de coordinación del departamento de orientación, mediante contrato de trabajo de duración indefinida. Luego, en el mes de marzo de 2003, se sumaron a sus labores las de Coordinadora de Programa de Integración e Inclusión Escolar PIIE; percibiendo, al 01 de junio de 2016, \$777.778.- mensuales.

Atendido que el día 20 de junio de 2016 falleció la directora del establecimiento, representante legal de la Sociedad Educacional Trinity Ltda., y sostenedora del Colegio Trinity School La Serena, doña Elsa Frávega Villablanca -madre de la actora- el 24 de junio del mismo año asumió como administrador de dicha sociedad don Luis Ulloa Sandoval.



Foja: 1

Es del caso que doña Andrea siguió ejerciendo sus funciones hasta el día 01 de junio de 2018, cuando fue separada de facto de todas sus labores; situación que fue reconocida en causa Rol O-445-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena (entre las mismas partes), cuya sentencia resolvió en su considerando décimo: “Por otra parte, tampoco se ha demostrado que las partes hayan convenido una condición adicional para acceder a esta remuneración, en cuanto a que se pagaría solo si se mantenía vigente la relación laboral hasta la fecha en que la entiende devengada, en este caso hasta junio”

Respecto del pago por las labores desarrolladas en el Proyecto de Integración e Inclusión Escolar -creado por su parte en el año 2003- y que cuenta con fondos propios aportados por el Estado a través del MINEDUC -como subvención especial PIIE- el Sr. Luis Ulloa Sandoval haciendo uso de la razón social de Sociedad Educacional y Cultural Trinity Ltda., dejó de cursar el pago de la suma mensual de \$777.778.- a contar del mes de enero de 2018; sumando a la fecha de su desvinculación de facto (01 de junio de 2018) la suma de \$3.888.890.-totalmente impagos.

En efecto, en la causa laboral O-445-2018, la demandada fue condenada al pago de las prestaciones de orden laboral que estaban impagas, omitiendo el pronunciamiento respecto de estos honorarios por estimar que constituyen una prestación de carácter civil; lo que dejó claro al acoger excepción de incompetencia incoada por la contraria.

Respecto a si la demandada contaba o no con los fondos para el pago de los honorarios durante los referidos cinco meses de 2018 (enero a mayo) hace presente que según lo indicado por el Oficio Ord. 018/2018 del 11 de abril de 2018, enviado al Sr. Luis Tello G., Secretario Ministerial de Educación Región de Coquimbo, el convenio PIIE se encontraba vigente al año 2018. Y naturalmente recibió la subvención, reteniendo la demandada el pago de los honorarios de doña Andrea Edding Frávega en forma ilícita.

En cuanto al Derecho, argumenta que la labor de Coordinación de Programa de Integración e Inclusión Escolar PIIE, constituye un contrato de prestación de servicios profesionales reconocido por la demandada y, como contrato, es ley para las partes y debe ser cumplido al tenor de los artículos 1545 y 1546



Foja: 1

del Código Civil. En este caso, habiéndose prestado los servicios contratados, la demandada se encuentra obligada a pagar el honorario pactado.

Por tanto, previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda en juicio sumario de cobro de honorarios, en contra de Sociedad Educacional y Cultural Trinity Ltda., representada por don Luis Eduardo Ulloa Sandoval -todos ya individualizados- a fin que sea condenada a pagar a doña Andrea Edding Fravega la suma de \$3.888.890.- a razón de \$777.778.- mensuales líquidos devengados entre enero y mayo de 2018, o la suma que el tribunal determine, con reajustes e intereses desde el momento que se devengaron estos pagos; más las costas de la causa.

Que por resolución de fecha 22 de agosto de 2018, rectificadora el día 26 de agosto del mismo año, se acogió a tramitación la demanda en juicio sumario.

Que con fecha 25 de septiembre de 2019, consta haberse notificado en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Código de procedimiento Civil a la parte demandada.

Con fecha 01 de octubre de 2020 se efectuó el comparendo de estilo, con la asistencia de los abogados de ambas partes.

La parte demandante, en primer lugar, ratificó íntegramente su libelo, solicitando sea acogido en la forma pedida, con costas.

A continuación la parte demandada procedió a contestar el libelo mediante minuta escrita, solicitando su rechazo con expresa condena en costas, en base a lo siguiente.

Refiere que doña Andrea Edding Fravega fue despedida del Colegio Trinity School de La Serena con fecha 01 de junio de 2018, no existiendo actualmente relación laboral entre las partes. En efecto, la contraria ejercía labores de directora, psicóloga, profesora, orientadora y coordinadora de ELE por 45 horas semanales, en virtud de un contrato de trabajo anterior. Respecto del Proyecto de Integración Escolar, este se prestó hasta 2017, no continuando para enero de 2018 respecto de la demandada, porque el proyecto se paralizó. Por ello recalca que la contraria no prestó servicio civil alguno en favor de la sociedad. Así, durante el año 2018 no hubo contrato de prestación de servicio civil, ni menos servicios efectivamente



Foja: 1

prestados por la contraria en el marco de la coordinación del Programa de Integración Escolar.

En lo que respecta a la relación laboral, señala que el despido se materializó preliminarmente mediante carta enviada con fecha 05 de diciembre de 2016, en circunstancias que la contraria alegó estar gozando de fuero laboral por encontrarse embarazada. Lo anterior fue discutido en causa de desafuero RIT O-47-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, alegando su parte incumplimiento grave de las obligaciones que emanaban del contrato de trabajo; hecho que se acreditó por el impedimento arbitrario de la contraria en dejar entrar al Sr. Ulloa Sandoval y a los contadores de la sociedad. Circunstancias que se comprobaron en virtud de sentencia definitiva firme, habiendo el tribunal acogido la demanda de desafuero, y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena rechazado el recurso de nulidad de la contraria, en Causa Rol 227-2017.

Al respecto precisa que la causa de desafuero se encuentra firme y ejecutoriada, toda vez que con fecha 30 de agosto de 2018 se rechazó recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la contraria, determinando la existencia de desafuero laboral de la demandante, por haber incumplido gravemente las obligaciones que emanaban de su contrato de trabajo; única causa eficiente de las prestaciones efectuadas por la contraria.

Que en virtud de lo anterior, el Juzgado del Trabajo de esta ciudad dictó, con fecha 18 de abril de 2018, la resolución “cúmplase” respecto de la sentencia acogida en primera instancia. Hecho que –precisa- acredita que la relación laboral se encuentra total y completamente extinguida. Esta apreciación se fortalece con lo dispuesto por dicho tribunal mediante resolución de fecha 07 de mayo de 2018, en la causa de desafuero aludida, la cual dispone que “el vínculo laboral que unía a las partes se encuentra disuelto” .

Sin perjuicio de lo relatado –continúa- y con una actitud completamente contumaz, la contraria seguía detentando, en los hechos, su labor contractual, incumpliendo la sentencia judicial. En base a ello, siguió impidiendo el ingreso al establecimiento educacional de don Luis Ulloa Sandoval. También la contraria alegaba que estaba prestando servicios en virtud de un contrato civil –aunque



Foja: 1

preliminarmente solicitó reconocer su relación laboral, cuestión que fue rechazada por el Juzgado de Letras del Trabajo en Causa RIT O-445-2018.

Esta circunstancia fáctica terminó a partir del 01 de junio de 2018, fecha en que el Sr. Ulloa se apersonó en dependencias del establecimiento educacional referido a hacer entrega de respuesta del proyecto de contrato colectivo a los miembros del Sindicato Empresa Trinity School La Serena; siendo la primera vez después de casi dos años que pudo ingresar al establecimiento, y sobre la cual se le comunicó a la demandante la existencia del fallo y la necesidad de su cumplimiento.

Dicha circunstancia –explica- no implica una separación fáctica o ilegal como señala la contraria, sino que correspondió a las facultades que el empleador debe ejercer, según lo dispone la ley laboral, sobre todo en hacer cumplir un fallo firme. Esta situación no refleja en lo absoluto una tolerancia del empleador para con doña Andrea de permitirle continuar en los hechos con sus funciones. Ello pues el representante legal de la sociedad estaba impedido de ingresar al establecimiento educacional por la propia trabajadora.

Por otro lado, si bien su parte reconoce que la contraria prestó servicios en virtud de un contrato civil como coordinadora del programa PIIE, este convenio terminó en los hechos a partir de 2017, no continuando para el año 2018. Al respecto, el pago respecto de la coordinación de Programa PIIE era efectuado en virtud de una subvención del Ministerio de Educación, a través de la Seremi correspondiente, que ingresaba a la sociedad respecto de ciertos alumnos prioritarios. Dicha subvención debía ser tramitada por parte del colegio receptor, coordinándola año a año ante la autoridad administrativa correspondiente; cuestión que realizó la contraria hasta diciembre de 2017, porque a inicios de 2018 ya figuraba desvinculada.

Ahora bien, para recibir la subvención el colegio debía informar año a año a la autoridad administrativa la cantidad de estudiantes pertenecientes a este proyecto, la individualización de los mismos y todo otro antecedente relevante atinente al proyecto; circunstancia que correspondía justamente a quien hacía las veces de coordinadora del proyecto, doña Andrea. Durante el mes de marzo del año 2018, dicha información no fue suministrada al MINEDUC por la demandante,



Foja: 1

lo cual redundó que el Programa se paralizara el primer semestre, hasta que el colegio subsanó dicha omisión.

Esta circunstancia implicó que durante el mes de mayo de 2018, el colegio fuese notificado de la resolución del MINEDUC que rechazaba el monto de la subvención para el año 2018 y que, por consiguiente, debía devolver el monto recibido durante el presente año, es decir, la suma de \$9.000.000.- aproximadamente, causando naturalmente un gran perjuicio para el colegio y la Sociedad Educacional y Cultural Trinity School. Justamente el hecho que la contraria no realizara gestión alguna al año 2018, es un indicio claro que no existía contrato de prestación de servicios en dicha fecha y, que además, no prestó los servicios mencionados.

Justo en esa misma época –junio de 2018- el Sr. Ulloa pudo hacer ingreso al establecimiento educacional, materializando el despido de la contraria, en circunstancias que jamás consintió la estancia y prestación de servicios de la Sra. Edding desde la fecha en que la causa de desafuero quedó firme hasta la separación material de ella.

Así las cosas, la actitud ilegal de impedir el ingreso al establecimiento e irrogarse funciones que no le correspondían, solicitando además pagos improcedentes, implican una trasgresión flagrante al principio de la buena fe contractual, no siendo procedente el pago de honorarios, pues no existió labor alguna que remunerar.

En este caso en concreto –recalca- no existe acuerdo de voluntades para el año 2018, pues es la contraria quien indistintamente se dispone a ejercer la labor, sin permitir al dueño de la empresa su ingreso al establecimiento, ni menos su consentimiento. Además –reitera- es claro que no se prestaron servicios en el año 2018 ya que la actora tenía que haber ingresado a los alumnos al sistema educacional para que la sociedad percibiera la debida subvención, lo cual fue interrumpido causándole enorme perjuicio a la sociedad dejando de percibir la subvención para el Programa de Integración Escolar para el primer semestre del año 2018.

Sin perjuicio de lo anterior, refiere que aun cuando su parte nunca pudo ingresar al establecimiento, los servicios aludidos por la contraria jamás se



Foja: 1

realizaron; razón por la cual no puede solicitar el cumplimiento forzado de la obligación. Así, en el evento improbable de declararse la existencia del contrato de prestación de servicios, su parte deduce excepción de contrato no cumplido.

Por otro lado, es improbable que la actora haya prestado servicios en los meses de enero y febrero de 2018, pues existían vacaciones escolares en dichas fechas y mal pudo tener contacto directo con los menores beneficiarios del PIIÉ. En este punto no existe prórroga del contrato civil –como si acontece en sede laboral- pues lo determinante para este caso es si existía o no contrato de prestación de servicios, o si esos servicios materialmente se prestaron. Entonces, al menos para enero y febrero -fecha en que se materializan las vacaciones de verano- mal pudo la contraria prestar servicio alguno.

Es más, la actora, previo a su despido material ejercía las labores de profesora, coordinadora ELE, orientadora, directora y psicóloga en el establecimiento educacional, en virtud de un contrato de trabajo de 45 horas semanales, las cuales se repartían en toda la jornada escolar del Colegio Trinity School. Dicha alegación ha sido complementada aludida en los múltiples juicios laborales deducidos por ella, y que, en los hechos impedían que la contraria pudiera ejercer adicional labor alguna. Ante aquello se pregunta, si existía un contrato de trabajo entre las mismas partes por una infinidad de funciones, por 45 horas semanales, que abarcaban toda la jornada escolar y laboral ¿En qué momento supuestamente la contraria realizaba las funciones que alude? Las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia señalan ser imposible que dichas prestaciones se hubiesen realizado, por tanto la supuesta obligación correlativa de la contraria jamás se cumplió, no siendo procedente la condena pretendida.

El tribunal tuvo por contestada la demanda.

A continuación se llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo.

Con fecha 11 de octubre de 2019 se recibió la causa a prueba.

Con fecha 16 de diciembre de 2020 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LA OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS:



Foja: 1

PRIMERO: Que la demandada, en su presentación que data del 17 de enero de 2020, objetó los siguientes instrumentos acompañados por la actora en su presentación de fecha 10 de enero del año en curso, a saber:

1.- Contratos de trabajo celebrados entre las partes con fecha 01 de marzo de 2011, y 01 de marzo de 2013, alegando que dichos documentos en ningún caso fueron firmados por el representante legal actual de la Sociedad Educacional y Cultural Trinity Limitada, sino aparentemente por la antigua Directora -fallecida al día de hoy- y madre de la demandante de autos. Es más, dichos contratos, siendo de carácter laboral, actualmente carecen de valor, pues es la propia demandante quien reconoce que su labor se pactó mediante contrato civil de prestación de servicios.

Justamente –continúa- estos contratos son de fecha anterior a la suscripción de los convenios, y reflejan un intento por determinar la naturaleza de los servicios. Además tales instrumentos no fueron firmados por el representante legal de la sociedad.

Enseguida alega que solo se acompañó un mero scanner de documentos no originales y que tampoco éstos han sido incorporados en la forma legal, atendida su supuesta originalidad. Dichos contratos no existen, y no existen copia originales de los mismos, justamente porque jamás se tuvieron a la vista por su parte y tampoco fueron acompañados en copia original por la demandante en los innumerables juicios sostenidos entre las partes.

Así las cosas, objeta los documentos aludidos por falta de firma del representante legal, por no constar reconocidos en juicio, por pesar sobre ellos prestaciones posteriores fuera de un régimen de subordinación y dependencia y, además, por no ser originales ni haberse acompañado físicamente al tribunal para dar cuenta de su originalidad.

2.- Liquidaciones de remuneraciones de doña Andrea Edding, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018, con glosa de no pago de PIIE y dirección. Ello por constituir estas liquidaciones un claro ejemplo de autotutela y vulneración de derechos tanto de la demandante como de las testigos, en torno a ejercer actitudes de facto sobre la administración del establecimiento. En sí –explica- dichas liquidaciones no emanan de su parte, sino particularmente de la



Foja: 1

demandante, la cual intenta hacer valer en juicio documentos ajenos como de la sociedad demandada, en una actitud totalmente arbitraria e ilegal. Lo anterior toda vez que a la época de su emisión, el Sr. Ulloa estaba impedido de ingresar al establecimiento, a fin de ejercer sus facultades de representante legal, y empleador de los trabajadores del Colegio Trinity, especialmente la demandante.

En suma, las liquidaciones jamás fueron entregadas a su parte y no contienen firma alguna de la empleadora, sino sólo un timbre del establecimiento el cual fue apropiado por la demandante en su calidad de directora y por la secretaria administrativa, doña Roxana Videla; quien también tiene la calidad de heredera en los derechos sociales quedados al fallecimiento de doña Elsa Fravega Villablanca.

Así las cosas, tratándose de documentos no emanados de su parte, ni firmados por ella, solicita acoger las objeciones opuestas.

SEGUNDO: Que con fecha 24 de enero de 2020, la actora evacuó traslado solicitando el rechazo de las objeciones opuestas, por cuanto los argumentos de la contraria no se refieren a una falta de integridad o falsedad de los documentos acompañados, sino simplemente a la aptitud probatoria de éstos; labor encomendada por ley al sentenciador.

TERCERO: Que habiéndose sustentado las impugnaciones en reparos sobre el valor probatorio de los instrumentos aludidos, labor que le compete exclusivamente al tribunal que conoce del litigio, en la oportunidad procesal correspondiente, no se hará lugar a las objeciones opuestas.

CUARTO: Que el demandante, en su presentación que data del 16 de noviembre de 2020, objetó el instrumento acompañado por la contraria en la audiencia de exhibición de documentos llevada a efecto con fecha 12 de noviembre de 2020, por falsedad y falta de integridad, en base a lo siguiente.

Alega que el documento mencionado es el único que exhibe la contraria pretendiendo dar cumplimiento a la exhibición parcialmente. Sin embargo lo acompañado no es la cartola bancaria de la cuenta corriente 03-90212-85 desde enero a junio de 2018, sino meramente un impreso que no contiene logo ni timbre del Banco Scotiabank, y tampoco es parte de un correo electrónico. En efecto, solo



Foja: 1

se trata de un listado de operaciones aparentemente bancarias que con toda probabilidad –a su juicio- fue confeccionado para indicar la información que el que exhibe quiere dar a conocer, y no necesariamente toda la información que debería contener los movimientos de una cuenta bancaria. La característica de mero impreso da cuenta desde ya de una total falta de integridad del documento, que impide concluir que se trate efectivamente de una cartola bancaria.

Por otro lado, junto a su escrito “téngase presente” la contraria ha acompañado la documentación perteneciente a una causa distinta que involucra al Sr. Luis Ulloa Sandoval como demandante y a doña Roxana Videla como demandada, en Causa Rol C-3013-2017 seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena; causa que por cierto perdió el Sr. Ulloa.

En suma, recalca que el documento exhibido es falso porque difiere con lo presentado por la contraria en su escrito “Téngase presente”, entonces hay diferencias que permiten concluir que el documento exhibido no solo adolece de falta de integridad sino que es simplemente falso, pues fue elaborado para ser presentado en la audiencia pretendiendo ser una cartola desde enero a junio de 2018 de la Cuenta Corriente 03-90212-85, del Banco Scotiabank.

QUINTO: Que con fecha 24 de enero de 2020, la actora evacuó traslado solicitando el rechazo de las objeciones opuestas, por cuanto no puede impugnarse un documento emanado de una diligencia probatoria que la misma demandante provocó y de la cual no existe etapa procesal alguna para su objeción. Menos aún es correcta la invocación al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, considerando que ni siquiera se indicó el numeral adecuado para fundamentar la objeción. En otras palabras, solo indica una objeción sin mencionar norma procesal precisa, ni causal legal alguna que importe su exclusión.

Tanto es así, que las objeciones sólo se pueden plantear en la medida que se otorgue plazo para ello, como es el caso de lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, en la medida que se acompañe o se decrete una actuación judicial “con citación”, o en virtud de lo dispuesto en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, el cual indica aquellos casos en que los documentos privados se tienen por reconocidos en el proceso. Aquí lo que importa –a su juicio- es que el documento –que es prueba de la contraria- fue exhibido en



Foja: 1

una diligencia probatoria provocada, siendo de su interés acompañarlo como prueba documental; comprendiendo parte de lo ordenado a exhibir y existiendo coherencia entre lo ordenado a exhibir, y lo exhibido.

Por otro lado, sostiene que el documento objetado es totalmente auténtico e íntegro. Al respecto precisa que las cartolas electrónicas bancarias no se pueden obtener sin cierta dificultad hasta dos años hacia atrás, comprendiendo una gestión presencial y extraordinaria la obtención de dicho documento, siendo ésta una cartola por movimientos del año 2018. Este documento fue obtenido en razón de movimientos propios de la cuenta desde el propio banco, a través del contador de la Sociedad, don Alberto Molina Martínez, en razón de las dificultades de desplazamiento propias del COVID-19; considerando que el único habilitado para la obtención de dicha documentación es el representante legal de la empresa, a quien, como adulto mayor, le era completamente dificultoso el traslado en contexto de emergencia sanitaria.

Por su parte, es del todo improcedente que la contraria exija que el documento deba ser “en forma” auténtico, cuando es un documento en donde consta la información que solicita, sin que sea necesario acompañar un correo electrónico o el seguimiento de la información como la contraria indica, a fin de que se decrete la falsedad del documento. Es tanto así que la contraria no cuestiona el contenido del documento, sino que pide su exclusión por falsedad en torno a la forma de obtención, considerando que son instrumentos que emanan de terceros ajenos a este juicio, como un Banco.

SEXTO: Que en primer lugar, no se accederá a la objeción fundada en la causal de falsedad, al no haberse acreditado por la incidentista la aparente alteración de la cartola en análisis.

Por otro lado, constando que el instrumento impugnado solo da cuenta de movimientos hasta el 28 de mayo de 2018, en circunstancias que en su individualización dice recoger los movimientos de la Cuenta Corriente N° 03-90212-85, desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de diciembre del mismo año, se hará lugar a la objeción fundada en la falta de integridad al ser evidente que la cartola no fue acompañada en forma completa.

II.- EN CUANTO A LAS TACHAS:



Foja: 1

SÉPTIMO: Que en la audiencia de fecha 14 de enero de 2020, la parte demandada opuso la tacha contemplada en el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, y en subsidio la del numeral 7 del mismo precepto legal, en contra de la testigo doña Roxana Cecilia Videla Sepúlveda, por tener interés en las resultas del juicio y enemistad con la demandada. Ello por cuanto la deponente es heredera testamentaria de la madre de la demandante, y como socia de la sociedad demandada, ha intentado –mediante acciones judiciales y extrajudiciales- excluir de la sociedad a don Luis Ulloa Sandoval. Contexto en el que ha sido testigo en innumerables causas respecto de las mismas partes.

Asimismo, alega que la deponente falta a la verdad cuando señala que no ha presentado solicitud de nombramiento de árbitro en la Causa V-388-2016 seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena, toda vez que es ella quien figura como solicitante.

Agrega que también falta a la verdad en cuanto a las denuncias presentadas ante la Dirección del Trabajo, en contra del Sr. Luis Ulloa Sandoval. Lo anterior por cuanto le ha imputado al representante de la demandada actos de violencia en su ingreso al establecimiento, calificándolo con graves y contundentes adjetivos que, a todas luces, demuestran que la testigo no es imparcial, tiene una profunda enemistad con el Sr. Ulloa, y además un interés –al menos indirecto- en el juicio.

OCTAVO: Que la parte demandante evacuó traslado de las tachas opuestas, solicitando sean rechazadas con costas, por cuanto el presente juicio dice relación con el cobro de honorarios no pagados a la Sra. Edding, por parte de la Sociedad Educacional y Cultural Trinity Limitada, que es la persona jurídica demandada. Por ende, todas aquellas afirmaciones acerca de la relación entre la testigo y el Sr. Ulloa no tienen ninguna vinculación con la causal expuesta.

Por otro lado, alega que en ninguna de las preguntas dirigidas a la testigo se hizo alusión a algún eventual grado de interés pecuniario en el juicio, consultándole –por ejemplo- qué podría estar ganando o perdiendo en caso de dictarse una sentencia favorable o desfavorable a la demandante. Además, tampoco se le preguntó si tiene enemistad con la parte contra quien declara, ya que todas las interrogantes se han centrado en situaciones supuestamente ocurridas con el Sr. Ulloa, quien no es parte en el juicio.



Foja: 1

NOVENO: Que de igual forma, en la audiencia de fecha 14 de enero de 2020, la parte demandada opuso la tacha contemplada en el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, y en subsidio la del numeral 7 del mismo precepto legal, en contra de la testigo doña Marina de Los Ángeles Corrotea Rojo, por cuanto ha declarado en múltiples juicios tanto civiles como laborales en contra de la sociedad demandada y, particularmente, en contra del representante legal de la misma.

En efecto, sostiene que en la prueba que incorporará se evidencia una profunda enemistad entre la testigo y don Luis Ulloa, lo que inhabilita a doña Marina para deponer en el presente juicio.

DÉCIMO: Que la parte demandante evacuó traslado de las tachas opuestas, solicitando sean rechazadas con costas, por cuanto en parte alguna la testigo ha sido interrogada respecto de la existencia de un interés directo o indirecto en el juicio, a saber, si existe en ella alguna ganancia pecuniaria producto de sus declaraciones.

Por lo demás, en atención a las funciones que la deponente cumple en el establecimiento como contadora, resulta a juicio del incidentista obvio que se ha requerido su declaración en varias instancias judiciales, especialmente en procedimientos laborales.

Finalmente, argumenta que la enemistad debe estar configurada respecto de la Sociedad Educacional y Cultural Trinity Limitada; que no es -como se pretende- don Luis Ulloa, por cuanto él solo detenta la representación legal de la demandada.

DÉCIMO PRIMERO: Que en primer lugar, para acoger la inhabilidad contemplada en el artículo 358 N° 6, el interés de las testigos debe ser pecuniario, cierto y concreto. Lo anterior dado que la falta de imparcialidad deriva de existir un provecho o utilidad para las deponentes, de obtenerse una sentencia favorable en el pleito.

Pues bien, examinada la declaración de las testigos, además de la prueba documental acompañada en el probatorio, no se evidencia interés pecuniario alguno en las resultas del juicio, por parte de las Sras. Videla y Corrotea. Ello al no haberse probado que la obtención de una sentencia favorable en el pleito, que



Foja: 1

ordene el pago de los honorarios aparentemente adeudados a doña Andrea Edding, reportará algún tipo de utilidad o beneficio económico a las deponentes; razón por la que se procederá al rechazo de las tachas en análisis.

DÉCIMO SEGUNDO: Que por otro lado, y tal como lo ha señalado en forma reiterada la jurisprudencia, para acoger la inhabilidad del numeral 7 del artículo citado, deben concurrir dos elementos copulativos: primero, el testigo debe tener íntima amistad con quien lo presenta a declarar o enemistad respecto de la persona contra quien declara; y, segundo, la amistad o enemistad debe exteriorizarse a través de hechos graves que el tribunal calificará según los antecedentes expuestos.

Considerando que las incidencias se plantearon en base a la aparente enemistad que las testigos tendrían con el representante legal de la sociedad demandada, tras declarar en diversos juicios en su contra, intentando por lo demás removerle de su cargo e imputándole al afecto actos de violencia, no se hará lugar a las tachas en examen desde que éstas se fundaron en situaciones acontecidas respecto de una persona que no es parte en el juicio, y nada tienen que ver con la empresa demandada, a saber, Sociedad Educacional y Cultural Trinity Ltda.

DÉCIMO TERCERO: Que en la audiencia de fecha 04 de febrero de 2020, la parte demandante opuso la tacha contemplada en el numeral 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, en contra de la testigo doña Loreto Alejandra Arias Becker, por desprenderse de su declaración una estrecha relación con la sociedad demandada. Ello al haber firmado un contrato de arrendamiento en representación de la Corporación Colegio Trinity.

Por otro lado, sostiene ser evidente su parcialidad al haber manifestado que compró derechos litigiosos respecto de los cuales la parte contaría en el juicio arbitral correspondiente a la sucesión cuya mandataria es doña Andrea Edding.

DÉCIMO CUARTO: Que la parte demandada evacuó traslado de la tacha opuesta, solicitando su rechazo con costas, por cuanto la contraria sostiene que existiría una relación contractual entre la Sociedad Educacional y Cultural Trinity Ltda., y la Corporación Colegio Trinity, siendo la deponente representante legal de esta última. En efecto, la relación contractual se refiere a personas jurídicas distintas de la persona natural de la testigo, la cual aun siendo representante legal



Foja: 1

de la demandada no tiene per se un interés directo o indirecto en el juicio. En otras palabras, la corporación educacional en ningún caso ha participado en el juicio y, además, dicha consideración no afecta la parcialidad de la declaración, ya que el arriendo involucra a personas distintas de la deponente.

Por otra parte, recalca que la testigo señaló no tener ningún interés en los resultados del juicio, no existiendo indicio alguno siquiera de que pueda tenerlo en su calidad de persona natural.

DÉCIMO QUINTO: Que examinados los documentos acompañados por la demandante, en particular el contrato de cesión de derechos litigiosos y el contrato de arriendo, ambos de junio de 2018, no se vislumbra interés pecuniario alguno que pudiera afectar la imparcialidad de la deponente; desde que en los mencionados convenios la Sra. Arias actuó en calidad de representante de una persona jurídica que no es parte en este juicio, cual es la Corporación Educacional Colegio Trinity.

En consecuencia, teniendo presente lo expuesto, además del hecho de no haberse fundamentado adecuadamente la causal de impugnación opuesta, se rechazará la tacha en análisis.

III.- EN CUANTO AL FONDO:

DÉCIMO SEXTO: Que para que proceda la acción interpuesta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, el demandante deberá probar:

- a) La existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre las partes;
- b) que la actora efectivamente prestó los servicios pactados, y;
- c) el monto de los honorarios estipulados y aparentemente debidos.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la actora, con el objeto de probar el fundamento de su acción, acompañó la siguiente prueba documental:

En la presentación de fecha 10 de enero de 2020:

1.- Sesenta y seis boletas emitidas por doña Andrea Edding Fravega en su calidad de Coordinadora de Proyecto PIIE para Sociedad Educacional y Cultural Trinity Ltda.



Foja: 1

2.- Sentencia de fecha 28 de febrero de 2019, dictada por el Juzgado del Trabajo La Serena en Causa O-445-2019.

3.- Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2018, dictada por el Juzgado del Trabajo La Serena en Causa M 316-2018.

4.- Oficio N° 1196 del 04 de julio de 2018, emitido por el Seremi de Educación.

5.- Declaración ante la Inspección del Trabajo emitida por doña Andrea Edding tras su separación de funciones, con fecha 04 de junio de 2018.

6.- Oficio de fecha 11 de abril de 2018, enviado por doña Andrea Edding al Seremi Educación.

7.- Oficio de fecha 24 de abril de 2018, enviado por doña Andrea Edding al Seremi de Educación.

8.- Correo de fecha 26 de abril de 2018, del Ministerio de Educación.

9.- Certificado digital de existencia de PIIE Mineduc de fecha 24 de julio de 2018.

10.- Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2011.

11.- Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2013.

12.- Contestación de demanda en Causa O-445-2018 seguida ante el Juzgado del Trabajo.

13.- Liquidaciones de remuneraciones de doña Andrea Edding, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018, con glosa de no pago de PIIE y dirección.

En la presentación de fecha 13 de enero de 2020:

1.- Correo electrónico de fecha 24 de enero de 2018 (Of-179) enviado por doña Andrea Edding a don Luis Ulloa, Pedro Guerrero, Jose Luis Jarpa, Sebastian Mandiola, y Humberto Carrasco, por falta de pago PIIE.



Foja: 1

2.- Correo electrónico de fecha 24 enero 2018 (Of-180) remitiendo planilla de pagos por remuneraciones y honorarios para efectuar en enero 2018.

3.- Correo electrónico de fecha 20 de marzo de 2018, de doña Andrea Edding, adjuntando Informe Gestión PIIE 2017, Nomina PIIE 2018, Nomina Evaluación Diferenciada 2018, Lista de documentos y formularios.

4.- Correo electrónico de fecha 03 de abril de 2018, envió programa Día del Ex Alumno.

5.- Correo electrónico de fecha 11 de abril de 2018, envió de programa de convivencia escolar 2018.

6.- Correo electrónico de fecha 16 de abril de 2018, enviado por doña Andrea Edding a don Jorge Aguilera y Luis Tello, del Mineduc, con respuesta de don Jorge Aguilera.

7.- Correo electrónico de fecha 16 de abril de 2018, enviado por don Luis Tello, Seremi de Educación, en respuesta al correo de la misma fecha emitido por doña Andrea Edding.

8.- Ord 09-2019, Informe Técnico Anual PIIE 2017, de fecha 24 de enero de 2018, y Ord N° 05-2019, Informe Técnico Anual PIIE 2017, de fecha 11 de enero de 2018, respuesta Mineduc mediante Ord N° 402 del 05 de marzo de 2018.

DÉCIMO OCTAVO: Que asimismo la demandante, con fecha 14 de enero de 2020, rindió prueba testimonial compareciendo las deponentes doña Roxana Cecilia Videla Sepúlveda, y doña Marina de Los Ángeles Corrotea Rojo, quienes fueron interrogadas al tenor de los puntos de prueba fijados en autos.

Doña Roxana Valdivia Sepúlveda declaró ser efectivo que existió un contrato de prestación de servicios por parte de la Sociedad Educacional y Cultural Trinity Ltda., y la Sra. Edding, entre los años 2003 y junio de 2018; que fue la última vez en que la actora trabajó en el colegio.

Al efecto explica que los contratos de prestación de servicios no tienen fecha de vencimiento, por lo que son a honorarios. En este contexto relata ser



Foja: 1

efectivo que la actora se desempeñó como coordinadora y encargada del programa de integración e inclusión escolar (PIIE), que en el año 2015 pasó a denominarse Programa de Integración e Inclusión Escolar (PII). Por tal labor la demandante percibía la suma de \$777.778.- mensuales brutos. Este honorario estaba determinado en el contrato de prestación de servicios y no fue pagado entre los meses de enero y mayo de 2018.

Repreguntada la testigo para que aclare hasta qué fecha estuvo vigente el contrato, señala que hasta junio de 2018.

Contrainterrogada para que diga si ha visto el contrato al que alude y, en caso afirmativo, quienes lo suscribieron, responde que vio el convenio y éste fue firmado por el representante legal de la Sociedad Educacional y Cultural Trinity Ltda., señora Elsa Frávega Villablanca y la Sra. Edding.

Contrainterrogada para que diga si siempre se procedió al pago mediante boleta de honorarios, contesta que solo en los últimos años, porque lo ordenó la fiscalización del Ministerio de Educación porque es un programa que pertenece al Estado.

Enseguida precisó que la actora prestaba servicios en el Colegio Trinity School de La Serena y sus honorarios solo le fueron pagados hasta el mes de diciembre de 2017.

Repreguntada la declarante para que diga si la demandante cumplió en tiempo y forma con las obligaciones del contrato suscrito, manifiesta que sí, siempre cumplió oportunamente hasta enero de 2018; momento en el que tuvo dificultades para entregar la rendición de cuentas al Estado porque no contaba con las claves para acceder a la plataforma del Mineduc. En efecto, esas claves fueron cambiadas por el Sr. Ulloa y no se lo informó a la actora quien era la coordinadora. En razón de ello, la Sra. Edding ingresó –manualmente- la nómina al Mineduc de los estudiantes PIIE para no faltar a sus obligaciones.

Da razón de sus dichos manifestando ser funcionaria del establecimiento en cuestión desde hace 30 años; contexto en el que le correspondía realizar junto a doña Andrea las nóminas y los ingresos a la plataforma.



Foja: 1

Contrainterrogada para que diga cómo es efectivo que el colegio se mantuvo cerrado durante los meses de enero y febrero de 2018, por vacaciones de estudiantes y funcionarios, responde no ser efectivo. Al respecto aclara que siempre las vacaciones son primero de los estudiantes y luego de los docentes al 30 de diciembre. Los funcionarios administrativos, auxiliares y, en este caso, la actora como coordinadora, trabajan hasta enero para cumplir con los plazos que establece el Ministerio de Educación para la rendición de cuentas del año anterior, subir las nóminas de estudiantes PIIE a la plataforma, y dejar todos los recursos didácticos que usa el PIIE para el año escolar siguiente. Todo ello –recalca- lo hacía doña Andrea.

Por otro lado, sostuvo no ser efectivo que el contrato haya terminado antes de 2018, pues la Sra. Edding prestó servicios como coordinadora hasta el 01 de junio de ese año. Ello le consta porque tenían una nómina de aproximadamente cincuenta niños que fueron atendidos desde marzo de 2018, por tres educadoras diferenciales, dos psicólogas y la coordinadora del PIIE (actora). Todo el equipo mencionado formaba parte del programa de integración y recibían –a excepción de doña Andrea- remuneración mensual.

Repreguntada para que diga si durante el año 2018 se presentó en el PIIE alguna persona para trabajar como coordinadora, responde que no pues la actora seguía a la cabeza del programa.

Repreguntada para que diga si doña Andrea recibió alguna carta que pusiera término a sus servicios durante el año 2018, responde que no. Por ello continuó en sus labores normalmente.

Contrainterrogada para que diga si el Sr. Ulloa pudo ingresar al establecimiento educacional entre enero y el 31 de mayo de 2018, contesta que no porque el Sr. Ulloa no se apersonó en el colegio en esas fechas, sino solo el 01 de junio de 2018 que fue a dejar la carta respuesta de negociación colectiva.

Más adelante precisa que al Sr. Ulloa jamás se le impidió la entrada al establecimiento, sin embargo él se comunicaba a través de su abogado y por correo electrónico.



Foja: 1

Doña Marina Corrotea Rojo señaló ser efectivo que a contar del año 2011, la coordinación del PIIE se comenzó a pagar por honorarios; a diferencia de lo que ocurría entre los años 2003 y 2010, donde se pagaba en la liquidación de sueldo como bono de coordinación PIIE. Agrega que el contrato de honorarios se pactó con una remuneración ascendente a \$777.777.- mensuales brutos, con vigencia indefinida y por diez horas semanales. Ello le consta porque ella era la encargada de transferir el dinero a doña Andrea hasta 2015, pues en 2016 le enviaba el dinero al Sr. Ulloa para que él realizara las transferencias de los sueldos y honorarios.

Contrainterrogada para que diga si la Sra. Edding emitió boletas de honorarios por las prestaciones que se cobran, durante el año 2018, contesta que sí. Luego rectifica su respuesta y responde que no, porque no se le hizo pago alguno.

Luego sostuvo que la actora siguió trabajando como coordinadora del PIIE hasta junio de 2018.

Enseguida relató que doña Andrea tuvo dificultades para cumplir sus obligaciones en enero de 2018, ya que el Sr. Ulloa cambió la clave de la plataforma del Ministerio de Educación. Por tanto, no pudo ingresar el informe técnico y los alumnos del PIIE para el año electivo correspondiente. Como el representante de la demandada nunca le entregó las claves, la actora tuvo que ingresar un oficio al Ministerio con los alumnos PIIE y el informe técnico, a fin de que la misma institución estatal los incorporara a la plataforma.

Repreguntada para que diga cómo es efectivo que en enero y febrero de 2018 el proyecto PIIE no fue ejecutado porque los estudiantes se encontraban de vacaciones, respondió que a pesar de estar los estudiantes de vacaciones el personal sigue trabajando, por lo que no es efectivo que el proyecto PIIE no fue ejecutado.

Luego señaló que el Sr. Ulloa solo podía ingresar al colegio cuando no había niños, para proteger a los alumnos. Agrega que ello está regulado en la Circular N° 1 de la Superintendencia de Educación.

DÉCIMO NOVENO: Que la parte demandada, con el objeto de sustentar su defensa, acompañó la siguiente prueba documental:

En la presentación de fecha 15 de enero de 2020:



Foja: 1

1.- Sentencia en Causa RIT O-47-2017, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, de fecha 14 de septiembre de 2017.

2.- Resolución “Cúmplase” en Causa RIT O-47-2017, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, de fecha 18 de abril de 2018.

3.- Certificación de ejecutoria en Causa RIT O-47-2017, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, de fecha 20 de abril de 2018.

4.- Resolución en Causa RIT O-47-2017, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, de fecha 07 de mayo de 2018

5.- Sentencia en Causa Rol 227-2017, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 22 de marzo de 2018 (recurso de nulidad rechazado).

6.- Sentencia en Causa Rol 6565-2018 de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 30 de agosto de 2019 (Recurso de unificación de jurisprudencia rechazado).

7.- Sentencia en Causa RIT T-96-2016, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, de fecha 20 de abril de 2017, caratulada Edding con Sociedad Educacional y Cultural Trinity Limitada.

8.- Sentencia en Causa Rol 75-2017 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 21 de julio de 2017 (recurso de nulidad rechazado).

9.- Resolución “Cúmplase” en causa RIT T-96-2016, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, de fecha 14 de agosto de 2017.

10.- Acta de diligencia Notario Rubén Reinoso Herrera de fecha 25 de septiembre de 2017.

11.- Carta al Servicio de Impuestos Internos de fecha 28 de abril de 2017.

12.- Demanda presentada por doña Andrea Edding Frávega, en Causa RIT M-316-2018, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.

13.- Sentencia en Causa Rol 264-2018, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, de fecha 18 de abril de 2019.



Foja: 1

14.- Resolución “Cúmplase” en Causa RIT M-316-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, de fecha 14 de mayo de 2019.

15.- Carta de despido de la trabajadora de 05 de diciembre de 2016.

16.- Sentencia en causa RIT O-445-2018, del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, de fecha 28 de febrero de 2019.

17.- Escrito contestación de demanda en causa RIT O-445-2018, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.

18.- Escrito de demanda de doña Andrea Edding Frávega en Causa RIT O-445-2018, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.

19.- Documentos liquidación de subvenciones PIIE correspondiente al periodo de enero a mayo del año 2018.

20.- Informe de Boleta de Honorarios Emitidos por SII, correspondiente al mes de enero de 2018.

21.- Informe de Boleta de Honorarios Emitidos por SII, correspondiente al mes de febrero de 2018.

22.- Informe de Boleta de Honorarios Emitidos por SII, correspondiente al mes de marzo de 2018.

23.- Informe de Boleta de Honorarios Emitidos por SII, correspondiente al mes de abril de 2018.

24.- Informe de Boleta de Honorarios Emitidos por SII, correspondiente al mes de mayo de 2018.

En el otrosí de la presentación de fecha 12 de noviembre de 2020:

1.- Audiencia de exhibición de documentos de fecha 08 de agosto de 2018, en Causa RIT C-3013-2017, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena.



Foja: 1

2.- Escrito de apercibimiento deducido por el abogado Juan Pablo Guíñez Llambías, en Causa RIT C-3013-2017, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena.

3.- Audiencia de exhibición de documentos de fecha 17 de agosto de 2018, seguida en Causa RIT C-3013-2017, del Primer Juzgado de Letras de La Serena.

4. Escrito “evacua traslado” , en Causa RIT C-3013-2017, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena.

5.- Resolución de fecha 03 de septiembre de 2018, en Causa RIT C-3013-2017, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena.

6.- Escrito “evacua traslado” , en Causa RIT C-3013-2017, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena.

7.- Resolución de fecha 01 de octubre de 2018, en Causa RIT C-3013-2017, seguida ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena.

VIGÉSIMO: Que enseguida la demandada, con fecha 14 de enero de 2020, rindió prueba testimonial compareciendo los deponentes don Alberto Molina Martínez, y doña Jacqueline Alejandra Cáceres Sepúlveda, quienes fueron interrogados al tenor de los puntos de prueba fijados en autos.

Don Alberto Molina Martínez señaló no existir constancia alguna de la existencia de un contrato profesional que ampare las funciones de la actora en el año 2018. Además no existe ninguna boleta de honorarios electrónica de la demandante en el ejercicio del 2018, ni tampoco existe constancia en la declaración jurada presentada ante el Servicio de Impuestos Internos en el 2019. A la vista de los balances tuvo que constatar que la información era veraz; en efecto, se trata de documentos a los que tuvo acceso, facilitándosele la clave de Impuestos Internos para efectuar la revisión a petición de don José Luis Jarpa.

Luego precisó constarle que la demandante emitió boletas de honorarios en los años 2016 y 2017, por pago de coordinación del PIIE.

A mayor abundamiento, sostuvo que si bien ha tenido acceso a las cartolas bancarias de la sociedad demandada, no puede asegurar que los pagos aludidos se



Foja: 1

hayan realizado, pues no ha tenido acceso a los talonarios de cheques ni a los conceptos de las transferencias realizadas.

Enseguida recalcó no constarle la existencia de un contrato a honorarios, lo que sí sabe es que hubo anomalías en la recepción de las subvenciones por concepto de PIIE en el primer semestre de 2018, a consecuencia de no haber implementado oportunamente en la plataforma del Mineduc el programa PIIE para el año 2018. Tanto así que hubo descuentos en las subvenciones recibidas, devolviendo todo el monto percibido a mayo de 2018.

A mayor abundamiento señaló que se hizo un descuento a la subvención de julio de 2018, por la suma de \$12.000.000.- y no se percibió subvención en los meses de mayo, junio y julio de ese mismo año, y venían siendo un promedio de \$5.200.000.- mensuales.

Contrainterrogado el testigo para que diga si tiene conocimiento que ese diferencial de doce millones fue devuelto al sostenedor del Colegio Trinity School, durante el año 2018 o 2019, aclarándose el problema de informe técnico e ingreso de alumnos al PIIE, respondió no tener constancia de que el monto no pagado y el monto descontado hayan sido enterados. Además, desde junio de 2018, la sostenedora del colegio ya no es la Sociedad Educacional Trinity, sino la Corporación Educacional Trinity, por lo tanto no tiene acceso a esos datos.

Doña Jacqueline Cáceres Sepúlveda manifestó que cuando el portero se ausentaba, ella recibía las pautas con las personas que podían entrar al colegio. En efecto, el Sr. Ulloa tenía prohibido el ingreso al establecimiento, sin embargo el representante de la demandada le decía que doña Andrea ya no era la directora.

Enseguida precisó que en el año 2016 la actora asumió como directora del colegio; cargo que desempeñó hasta junio de 2018.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que asimismo la demandada, con fecha 04 de febrero de 2020, rindió prueba testimonial compareciendo la deponente doña Loreto Alejandra Arias Becker, quien fue interrogada al tenor de los puntos de prueba fijados en autos.

En primer lugar, la testigo señaló ser presidenta de la Corporación Educacional Colegio Trinity y, como tal, le consta que no hay servicios de



Foja: 1

honorarios presentados por la actora en el año 2018, ya que fue despedida en diciembre de 2017.

Repreguntada para que diga si la actora realizó funciones del PIIE durante el primer semestre de 2018, contesta que no, porque no se subió la información requerida al sistema del Ministerio de Educación.

Repreguntada para que diga si ese incumplimiento le provocó un perjuicio económico a la sociedad, responde que sí. Ello porque en el primer semestre de 2018 se tuvo que invertir en gastos del PIIE por alrededor de \$25.000.000.- que no fueron devueltos.

Enseguida relata que la demandante realizaba funciones de dirección del colegio, solo eso.

Repreguntada la deponente para que diga si la actora prestó servicios como psicóloga en el PIIE durante el primer semestre de 2018, contesta que nunca la vio ni firmó alguna evaluación –al menos- de su hijo.

Repreguntada para que diga si doña Andrea rindió cuentas de su supuesta labor como coordinadora del PIIE en el año 2018, contesta que no, ni de su labor en la dirección ni en el PIIE. Además indica haber sido testigo del desconocimiento del representante legal de la sociedad respecto de la situación del colegio, ya que se contrató a otra persona para ingresar al sistema de administración.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que con fecha 21 de enero de 2020 compareció a absolver posiciones doña Andrea Renee Edding Fravega –demandante en este juicio- quien declaró al tenor del pliego de posiciones acompañado con fecha 09 de enero del año en curso.

VIGÉSIMO TERCERO: Que mediante oficio recepcionado por el tribunal con fecha 10 de marzo de 2020, el Secretario Regional Ministerial de Educación, don Claudio Oyarzún Cabezas, informó asuntos relativos al ingreso de alumnos al Programa de Integración Escolar del Colegio Trinity School durante el 2018 y las subvenciones correspondientes al mismo programa para los años 2018 y 2019.

VIGÉSIMO CUARTO: Que de acuerdo a la prueba aportada en el curso del procedimiento, son hechos acreditados en la causa los siguientes: 1) Que doña



Foja: 1

Andrea Edding Fravega fue contratada por la sociedad demandada en marzo de 1998 para desempeñar funciones de coordinación en el departamento de orientación del Colegio Trinity School de La Serena. Posteriormente, en marzo de 2003, se le asignó la coordinación del Programa de Integración e Inclusión Escolar PIIE; 2) que por sentencia de fecha 14 de septiembre de 2017, en Causa RIT O-47-2017, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, se accedió a la solicitud de despido de doña Andrea Edding tras haberse acreditado incumplimiento contractual; 3) que aun cuando se otorgó la autorización para despedir a la actora, el empleador no materializó formalmente el despido sino hasta el día 01 de junio de 2018; 4) que por sentencia de fecha 28 de septiembre de 2018, en Causa RIT M-316-2018, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, se ordenó la reincorporación de doña Andrea a las funciones que ejercía en el Colegio Trinity School al 01 de junio de 2018; 5) que por sentencia de fecha 28 de febrero de 2019, en Causa RIT O-445-2018, seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, la actora dedujo demanda de cobro de remuneraciones en contra de la Sociedad Educacional y Cultural Trinity Limitada, demostrándose al efecto que ejerció labores como orientadora, psicóloga y encargada ELE entre enero y mayo de 2018. En razón de ello se condenó a la sociedad demandada a pagar las remuneraciones adeudadas por ese periodo; 6) que por sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena de fecha 18 de abril de 2019, se acogió el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad demandada en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena con fecha 28 de septiembre de 2018, resolviéndose mediante sentencia de reemplazo que no ha lugar a la demanda de reincorporación a labores por fuero de negociación colectiva.

VIGÉSIMO QUINTO: Que en efecto de acuerdo a la prueba explicitada, se ha demostrado que el contrato de prestación de servicios profesionales relativo a la coordinación del Programa de Integración e Inclusión Escolar PIIE, del Colegio Trinity School, subsistió inalterable durante el periodo comprendido entre los meses de enero y mayo de 2018. Lo anterior toda vez que, a pesar de contarse con la autorización judicial para proceder al despido, éste no se formalizó sino hasta junio de 2018; por lo que doña Andrea –tal como consta en la documental acompañada– se mantuvo en sus labores de coordinación contactándose con el Seremi de Educación de la región y remitiendo, en marzo de 2018, el Informe de Gestión PIIE 2017, Nómina PIIE 2018, Nómina de Evaluación Diferenciada 2018, y Lista



Foja: 1

de Registro de Documentos y Formularios. Asimismo, consta que en abril de 2018 envió mediante correo electrónico el Programa del Día del Ex Alumno 2018 y el Programa del Día de la Convivencia Escolar 2018.

VIGÉSIMO SEXTO: Que habiéndose probado tanto la vigencia del contrato de prestación de servicios durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2018, como el hecho de haberse mantenido la actora en el ejercicio de sus funciones mediante la realización de diversas gestiones propias de su cargo, no se hará lugar a la excepción de contrato no cumplido opuesta por la parte demandada, atendida su manifiesta falta de fundamento.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que en relación al monto de los honorarios debidos, se estará a lo consignado en las liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018, donde doña Andrea Edding dejó constancia de no haberse pagado la suma mensual de \$700.000.- (setecientos mil pesos) por concepto de remuneración de sus labores en la coordinación del Programa de Integración e Inclusión Escolar PIIE.

Considerando entonces que se le adeudan a la actora los honorarios correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2018, a razón de \$700.000.- mensuales, se condenará a la Sociedad Educacional y Cultural Trinity Limitada a pagar a doña Andrea Edding Fravega la suma de \$3.500.000.- (tres millones quinientos mil pesos).

VIGÉSIMO OCTAVO: Que los antecedentes no pormenorizados en lo que antecede en nada alteran o modifican lo ya concluido.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 1545 y 1698 del Código Civil; y artículos 144, 160, 170, y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; **se resuelve:**

I.- Que se rechaza la objeción documental opuesta por la parte demandada mediante presentación fecha 17 de enero de 2020. Por el contrario, se acoge la objeción documental opuesta por la parte demandante mediante presentación de fecha 16 de noviembre de 2020.

II.- Que se rechazan las tachas opuestas en las audiencias de fecha 14 de enero y 04 de febrero de 2020.



Foja: 1

III.- Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta con fecha 20 de agosto de 2019, y en consecuencia, se condena a Sociedad Educacional y Cultural Trinity Ltda., representada por don Luis Eduardo Ulloa Sandoval, a pagar a doña Andrea Renee Edding Fravega la suma de \$3.500.000.- (tres millones quinientos mil pesos) por concepto de honorarios profesionales, más reajustes e intereses.

IV.- Que se condena en costas a la parte demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Dictada por doña Ghislaine Landerretche Sotomayor. Juez de Letras Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **La Serena, veintiuno de Enero de dos mil veintiuno**



